

MOVIMIENTOS SOCIALES Y ACTITUDES POLÍTICAS EN LA CRISIS DEL FRANQUISMO

Carme Molinero/Pere Ysàs
Universitat Autònoma de Barcelona

En los últimos años, en la aún poco abundante historiografía sobre la transición española de la dictadura franquista a la democracia parlamentaria, se está consolidando una interpretación que, a riesgo de simplificar, podría enunciarse así: el establecimiento de un régimen democrático después de la muerte del general Franco fue obra, en primer lugar, del rey Juan Carlos —el «motor» o el «piloto» del cambio¹—, de los políticos reformistas del franquismo —con Adolfo Suárez a la cabeza—, con la colaboración, en la etapa final del proceso que culminó en las elecciones del 15 de junio de 1977, de los dirigentes de una oposición democrática débil y poco cohesionada.

Obviamente existen versiones diferenciadas de esta interpretación caracterizadas por enfatizar aspectos distintos. Así la versión de Vicente Palacio Atard es representativa de las que minimizan en forma extrema el papel de la oposición democrática y otorgan casi todo el protagonismo del cambio al rey y, secundariamente, a los reformistas del régimen², mientras que la de Javier Tusell lo es de unas versiones más equilibradas y más matizadas respecto al papel de los distintos actores³.

¹ La definición del rey como «motor» del cambio se debe a José M.^a Areilza. Para Charles T. Power es más apropiado referirse al rey como el «piloto» del cambio. Véase de este historiador británico *El piloto del cambio. El rey, la Monarquía y la transición a la democracia*. Barcelona, 1991.

² Vicente PALACIO ATARD, *Juan Carlos I y el advenimiento de la democracia*. Madrid, 1989.

³ Javier TUSELL, *La transición española a la democracia*. Madrid, 1991.

Pero, al margen de esas diferencias, las distintas versiones de la interpretación enunciada al principio coinciden en centrar el análisis en las instituciones y en las élites gobernantes y opositoras, prescindiendo de las actitudes políticas de las clases y grupos de la sociedad española y, sobre todo, del papel de los movimientos sociales. A lo sumo se subraya la «madurez» del pueblo español, manifestada paradójicamente mediante una extendida pasividad y con el apoyo en las urnas al proyecto de «reforma política».

Indudablemente la caracterización de la situación política, social y económica de España en el momento de la muerte de Franco es fundamental para el análisis de la transición. Para Palacio Atard el sistema franquista era un «aparato institucional consolidado, dispuesto a sucederse a sí mismo, pero al que fallaba la pieza principal, la Corona»⁴. El régimen no se sentía acosado puesto que «las movilizaciones en la calle de las oposiciones en los últimos tiempos del franquismo no ocasionaron grandes quebraderos de cabeza a los gobernantes»; los movimientos estudiantiles «fueron por entonces explosiones románticas, idealistas», y en cuanto a los movimientos obreros, si bien crecieron y se politizaron desde 1973 «no está nada claro que el efecto de estas actuaciones en 1975 produjera en la “burguesía dominante” un reflejo capaz de transmitirse a las esferas de gobierno»⁵. La economía española, por otra parte, si bien ofrecía motivos de preocupación «había soportado mejor que la de otros países más industrializados el impacto de los precios del petróleo y de las materias primas»⁶.

Sin embargo, la situación española en 1975 era considerablemente distinta de la descrita por Palacio Atard y ello determina una interpretación de la transición española diferente de la expuesta al principio.

La economía española había crecido desde los años sesenta y se había transformado al calor de la expansión capitalista mundial; este crecimiento se inició después de un viraje radical en la política económica del régimen franquista que, desde el inicio de los años cincuenta, comprobaba cómo la opción autárquica le había conducido a un callejón sin salida. La reinserción española —después de un programa de liberalización económica— en la economía capitalista internacional, que estaba experimentando un excepcional crecimiento desde el inicio de esos mismos años cincuenta, hizo posible acabar con los estrangulamientos que a lo largo de veinte años —la mitad del dilatado período franquista—

⁴ Vicente PALACIO ATARD, *Op. cit.* p. 51.

⁵ Vicente PALACIO ATARD, *Op. cit.* pp. 48 y 49.

⁶ Vicente PALACIO ATARD, *Op. cit.* p. 56.

había sufrido la economía española. La industria, la gran protagonista del aumento de la renta nacional, creció desde el momento que las importaciones de materias primas y maquinaria estuvieron aseguradas por la disponibilidad de divisas —transferencias de emigrantes y, sobre todo, el turismo, importantísimo elemento dinamizador del período—, y con la apertura al capital extranjero, que llegó dispuesto a aprovechar las condiciones laborales y el potencial de crecimiento del mercado español; al mismo tiempo, la expansión europea absorbió la fuerza de trabajo española que la estructura productiva del país no era capaz de ocupar. Así se puede afirmar que el crecimiento fue inducido⁷ y que la interrelación con el conjunto europeo avanzó de forma muy considerable aunque España mantuviera una posición periférica.

Del mismo modo la crisis económica, iniciada en los años setenta, tuvo los mismos orígenes que en el resto de las economías occidentales, aunque tuvo un desarrollo relativamente específico que se puso de manifiesto tanto respecto a su cronología como a su intensidad.

La explicación del origen de la crisis se encuentra en el aumento del precio del petróleo y también, aunque no adquiriera la misma relevancia, en el encarecimiento de otras materias primas y alimentos. A corto plazo el incremento de precios primarios comportaba un empeoramiento de las balanzas comerciales de los países industrializados y, lo que es más importante, alteraba una característica básica del período expansivo de 1950-1970: la relación real de intercambio favorable a los productos industriales respecto a los primarios, que contribuyó a la expansión económica de los años cincuenta y sesenta. El aumento del precio de la energía supuso un descenso de la renta disponible que debía repercutir en los trabajadores reduciendo sus salarios, en los empresarios reduciendo sus beneficios, o en ambos al tiempo; en cualquier caso convendrá no olvidar esta perspectiva del problema para explicarnos una parte del conflicto que caracteriza estos años. Para explicar el cierre del período expansivo hay que considerar otros elementos además del incremento de la factura energética: por un lado la competencia que países de industrialización reciente realizaban en algunas producciones de gran tradición europea y que generaban un alto porcentaje de puestos de trabajo —textil, electrónica de consumo, siderurgia, etc., sectores que se vieron gravemente afectados por el paro—; por otro lado incidía sobre la economía europea la inestabilidad de la economía

⁷ José L. GARCÍA DELGADO y Julio SEGURA, *Reformismo y crisis económica. La herencia de la dictadura*. Madrid, 1977, p. 77 y Carles SUDRIÀ *Historia Económica de Catalunya*, vol. IV p. 195.

norteamericana⁸, sin olvidar como elemento de fondo el agotamiento del ciclo expansivo en las economías desarrolladas⁹.

La economía española se vio afectada por este mismo tipo de problemas pero agudizados por la utilización de una tecnología energéticamente intensiva y por la malformación del tejido industrial del país, escasamente capacitado para una intensificación de la competencia internacional. En cuanto a la cronología, los signos evidentes de la crisis —freno drástico de las inversiones, aumento del paro y de la inflación— tomaron fuerza prácticamente un año después que en nuestro entorno, en la segunda mitad de 1974 y el año siguiente, 1975, fue el de menor crecimiento desde 1960. El retraso en la manifestación de la crisis era el resultado de la política gubernamental tendente a aplazar las repercusiones sociales de la coyuntura económica, dado que la situación política no permitía abrir un nuevo frente de inestabilidad; pero desde 1975 las suspensiones de pagos, cierres de empresas, despidos y eliminación de hora extras agudizaron la conflictividad social ya existente.

La conflictividad social presente a lo largo de los años sesenta alcanzó la máxima intensidad a partir de 1970, momento en el que confluieron un conjunto de elementos que contribuyeron a dinamizar la situación política hasta el punto de que —y éste es el eje de nuestra argumentación— mediados los años setenta el régimen franquista no podía sucederse a sí mismo aunque sus oponentes no habían podido derribarlo.

La conflictividad social, en algunos momentos latente, en muchos abierta, era fundamentalmente consecuencia de la transformación de la sociedad española y del carácter dictatorial del régimen político. En los años sesenta había avanzado extraordinariamente el proceso de urbanización iniciado a principios de siglo; la «modernización» de la economía comportó el desplazamiento de millares de personas desde la agricultura a la industria y a los servicios, cambiando sus posibilidades y sus pautas de consumo y de vida. El desarrollo económico y la intensificación de los cambios sociales, aunque en amplios sectores agudizó la

⁸ Luis Ángel ROJO, «La crisis de la economía española 1973-1984» en Jordi NADAL, Albert CARRERAS y Carles SUDRIÀ (Comp.) *La economía española en el siglo XX. Una perspectiva histórica*. Barcelona, 1987, p. 191.

⁹ Un tratamiento detallado de las características de la crisis en Miren ETXEZARRETA (Coord.), *La reestructuración del capitalismo en España 1970-1990*. Barcelona, 1991, especialmente el capítulo de Jordi CATALÁN «Del "milagro" a la crisis: la herencia económica del franquismo».

pasividad y el individualismo, al mismo tiempo también comportó una intensificación de la conflictividad social¹⁰, conflictividad que, dado el inmovilismo político y la represión de toda forma de protesta o reivindicación fuera de los estrechos cauces establecidos, generó una tensión sociopolítica cada vez más aguda.

En este artículo señalaremos las causas y tipología de la conflictividad, sin detallar sus manifestaciones concretas. Nos ocuparemos primero de la conflictividad laboral¹¹ de los años sesenta y primera mitad de los setenta, conflictividad que ha sido exagerada o minimizada desde distintas perspectivas: desde la literatura antifranquista militante se ha tendido a sobredimensionar los conflictos obreros, mientras desde otros análisis, aparentemente más objetivos y académicos, se ha tendido a minimizarlos. Es obvio que un amplísimo sector de trabajadores no participó nunca en un conflicto laboral, pero también es cierto que desde la primavera de 1962, y aunque con fluctuaciones importantes y ejerciendo la represión un fuerte efecto disuasorio, la conflictividad tendió a extenderse, afectando intensamente a las concentraciones industriales tradicionales —Catalunya, País Vasco, Asturias— pero también a otras áreas de industrialización reciente —especialmente Madrid, y también Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Sevilla—; por otro lado la conflictividad afectó a los sectores de mayor tradición reivindicativa —siderometalurgia, textil, minería— pero también a la construcción y a servicios como la banca, la enseñanza, la sanidad, etc. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo, al margen de la exactitud de las cifras, son una buena referencia del nivel y tendencias de la conflictividad laboral de estos años.

Aunque inicialmente los conflictos surgían casi siempre de reivindicaciones laborales o quejas del mismo carácter, se politizaban rápidamente ya que el marco legal seguía prohibiendo dos instrumentos básicos de la acción reivindicativa: la huelga y la libre asociación; por otro

¹⁰ Un planteamiento general de la conflictividad a partir de los años sesenta en Juan Pablo FUSI «La reaparición de la conflictividad en la España de los sesenta», en Josep FONTANA ed., *España bajo el franquismo*. Barcelona, 1986.

¹¹ Véanse los estudios de José M.^a MARAVALL, *Dictadura y disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo*. Madrid, 1979; y *El desarrollo económico y la clase obrera*. Madrid, 1970. También los de Pedro IBARRA, *El movimiento obrero en Vizcaya: 1967-1977. Ideología, organización y conflictividad*. Bilbao, 1987; José Vicente IRIARTE, «Aproximación a la conflictividad social en Navarra 1970-1975», *Príncipe de Viana*, 177, 1986; Fausto MIGUÉLEZ, *La lucha de los mineros asturianos bajo el franquismo*. Barcelona, 1977; y del mismo autor *Seat. La empresa modelo del régimen*. Barcelona, 1977; Ignasi RIERA, José BOTELLA, *El Baiz Llobregat. 15 años de luchas obreras*. Barcelona, 1976.

Evolución de la conflictividad laboral

Año	N.º de conflictos	Trabajadores afectados	Horas perdidas
1966	179	36.977	1.478.080
1967	567	198.740	1.887.693
1968	351	130.742	1.925.278
1969	491	205.325	4.476.727
1970	1.595	460.902	8.738.916
1971	616	222.846	6.877.543
1972	835	277.806	4.692.925
1973	931	357.523	8.649.265
1974	2.290	685.170	13.989.557
1975	3.156	647.100	14.521.000

Fuente: Ministerio de Trabajo. Informes sobre conflictos colectivos de trabajo.

lado, con mucha frecuencia, las represalias patronales o la represión policial extendieron y/o radicalizaron los conflictos, incluso desplazando las causas iniciales que los originaron, de manera que las movilizaciones de solidaridad y las reivindicaciones de carácter político se hicieron frecuentes, al constatar los trabajadores en cada conflicto los condicionantes directos derivados del marco institucional y legal existente.

En definitiva, se puede afirmar que las luchas y las organizaciones de las que los trabajadores se dotaron —con un protagonismo singular de Comisiones Obreras¹²— contribuyeron decisivamente al desgaste del régimen: la paz de la que se vanagloriaba el franquismo era sinónimo de ausencia de conflictos y, sin embargo, desde los años sesenta y especialmente en la década de los setenta, el régimen se vio forzado a coexistir con una continuada, y a veces intensa, conflictividad. Además, la propia represión contribuyó a radicalizar y extender el rechazo al franquismo. La acción obrera, por otra parte, erosionó en especial una institución básica del aparato franquista: el Sindicato Vertical, además minado interiormente por la utilización de los cargos electivos

¹² Ver, entre otros, los trabajos de Fausto MIGUÉLEZ, «Los orígenes del nuevo movimiento obrero en España. Algunas hipótesis de investigación», en Manuel GONZÁLEZ PORTILLA, Jordi MALUQUER DE MOTES, Borja DE RIQUER (eds.), *Industrialización y nacionalismo. Análisis comparativos*. Barcelona, 1985; Sebastián BALFOUR, *Dictatorship, Workers, and the City. Labour in Greater Barcelona since 1939*. Oxford, 1989; Carme MOLINERO y Pere YSÀS, «Comissions Obreres» en Pere GABRIEL et. al. *Comissions Obreres de Catalunya 1964-1989. Una aportació a la història del moviment obrer*. Barcelona, 1989.

efectuada por las Comisiones Obreras y otros grupos antifranquistas. Las elecciones sindicales de la primavera de 1975 evidenciaron la quiebra de la Organización Sindical.

En la acción reivindicativa de los trabajadores jugaron un importante papel, ya en los años cincuenta, movimientos apostólicos como la HOAC y la JOC, y a partir de los sesenta, además, el apoyo y la cobertura ofrecido por un importante y creciente sector de la Iglesia católica¹³. Estas nuevas actitudes del catolicismo español hacia el mundo obrero provocaron la aparición de un importante conflicto entre la Iglesia y el régimen franquista y este conflicto, a su vez, reforzó considerablemente el distanciamiento de aquella ya favorecido por los nuevos vientos procedentes del Concilio Vaticano II.

A la conflictividad laboral se añadió desde finales de los años sesenta una nueva conflictividad vecinal en los barrios obreros. El modelo de crecimiento de los sesenta dirigió las migraciones internas hacia las zonas ya industrializadas y hacia algunos núcleos industriales nuevos. En estas zonas, donde el crecimiento fue espectacular, los intereses especulativos generaron áreas urbanas desordenadas, sin prever los servicios mínimos imprescindibles, aprovechándose sin escrúpulos de las necesidades existentes. Una vez asentados los inmigrantes, en los nuevos barrios empezaron a aparecer movimientos reivindicativos vecinales, siempre a partir de aquellas necesidades más urgentes, que evidenciaban el abandono público que sufrían¹⁴. Las asociaciones de vecinos nacieron para resolver los problemas comunes del barrio dentro de la legalidad, pero como se tuvieron que enfrentar al poder político local, y no renunciaron a rebasar el estrecho marco legal vigente, la politización y el conflicto marcó su actuación. Su trayectoria podría resumirse señalando que empezaron reclamando semáforos o asistencia sanitaria y acabaron reivindicando ayuntamientos democráticos.

Pero no sólo fueron los trabajadores los que se enfrentaron de forma creciente al régimen franquista. Los estudiantes extendieron la repulsa hacia la dictadura a otras capas sociales que en los últimos años

¹³ Ver, Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR, «La cruz y el martillo. La resistencia obrera católica», en Javier TUSELL, Alicia ALTED, Abdón MATEOS (coords.), *La oposición al régimen de Franco*. Madrid, 1990. También, Santos JULIÁ, «Obreros y sacerdotes: cultura democrática y movimientos sociales de oposición», en Javier TUSELL, Alicia ALTED, Abdón MATEOS (coords.), *op. cit.*

¹⁴ Ver, Equipo de Estudios, *La lucha de barrios en Barcelona*. Madrid, 1976; Manuel CASTELLS, *Crisis urbana y cambio social*. Siglo Veintiuno, Madrid, 1981.

sesenta empezaron a cuestionar la legitimidad del franquismo. Desde mediados de los sesenta la conflictividad universitaria fue permanente¹⁵, agudizándose en los primeros setenta, momento en que también se extendió a la enseñanza secundaria. Los estudiantes se movilizaron tanto por reivindicaciones propias, como por solidaridad con otros sectores y abiertamente contra la dictadura.

Otro frente de conflicto se abrió en Catalunya y en el País Vasco donde las reivindicaciones nacionales —extendidas entre las clases medias y también populares— tendieron a generalizarse. En Catalunya las reivindicaciones nacionales eran defendidas por la práctica totalidad de las organizaciones antifranquistas y se convirtieron en uno de los ejes vertebradores de un movimiento unitario único en todo el Estado —la Asamblea de Catalunya— que al estar compuesto por todo tipo de organizaciones, desde políticas a culturales, tenía un perfil interclasista y una apreciable capacidad movilizadora¹⁶. En el País Vasco el conjunto de la vida sociopolítica se vio condicionada por la reivindicación nacional al crecer el protagonismo de la lucha armada de ETA; la represión policial no actuó sólo sobre el entorno de ETA sino que en muchas ocasiones fue masiva e indiscriminada, lo que a su vez despertó una amplia solidaridad vecinal y el rechazo no sólo al franquismo sino al conjunto de las instituciones estatales¹⁷.

¹⁵ Véase José M.^a MARAVALL, *Dictadura y disenso político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo*. Madrid, 1978; Josep M.^a COLOMER, *Els estudiants de Barcelona sota el franquisme*. Barcelona, 1978; Antonio NADAL, «Los estudiantes y la oposición al franquismo. El Sindicato Democrático de la Universidad de Granada (1968-1970)» en Javier TUSELL, Alicia ATED y Abdón MATEOS (coords.) *op. cit.*, Madrid, 1991.

¹⁶ Véase José M.^a COLOMER, *Assemblea de Catalunya*, Barcelona, 1976; y A. BATISTA y J. PLAYÀ, *La gran conspiració. Crònica de l'Assemblea de Catalunya*, Barcelona, 1991. Estos movimientos han sido interpretados erróneamente en algunas ocasiones. Así Julio Gil Pecharromán cuando considera que «el fenómeno más destacado de la oposición de este período —fuera del espectacular crecimiento del sindicalismo de Comisiones Obreras— fue la maduración de un conjunto de *partidos nacionalistas* que en determinadas regiones, como el País Vasco o Cataluña, encontraron un masivo apoyo popular...». Véase Julio GIL PECHARROMÁN, «Cuarenta años de franquismo», en Antonio RAMOS GASCÓN (ed.) *España hoy. I Sociedad*. Madrid, 1991. El subrayado es nuestro.

¹⁷ Sobre ETA ver José M.^a GARMENDIA, *Historia de ETA*. San Sebastián, 1982; Merce IBARZ, *Breu història d'ETA 1959-1979*, Barcelona, 1981; Gurutz JAUREGUIL, *Ideología y estrategia de ETA*. Madrid, 1981, y del mismo autor «ETA: causas de su nacimiento, génesis, ideológica y evolución estratégico-política» en Javier TUSELL, Alicia ALTED y Abdón MATEOS (coords.), *Op. cit.*; Pedro IBARRA, *La evolución estratégica de ETA*. San Sebastián, 1987; José Ramón RECALDE, «Crisis de legitimidad en los años sesenta» en Javier TUSELL, Alicia ALTED y Abdón MATEOS (coords.), *Op. cit.* Véase también Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR, José Manuel AZCONA, *El Nacionalismo Vasco*, Madrid, 1991.

En resumen, la conflictividad generalizada —laboral, vecinal, estudiantil, nacional— erosionó extraordinariamente la dictadura. Dada la contestación social, el régimen se vio obligado a enseñar de forma permanente su cara represora y ello dificultó cada vez más las posturas inhibicionistas. La acción reivindicativa fue al mismo tiempo la fuente esencial de reclutamiento de las organizaciones políticas antifranquistas que, hasta la crisis del franquismo, fueron fundamentalmente de izquierdas y con un gran protagonismo del Partido Comunista¹⁸.

En este sentido es necesario señalar que los grupos burgueses dominantes habían apoyado la política gubernamental, ejecutada fundamentalmente por los tecnócratas del Opus Dei, de estimular el crecimiento económico como mecanismo de estabilización social y, paralelamente, de iniciar una tímida liberalización política que, además de otorgar una cierta libertad de expresión, contemplara una mínima participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pero esta política tenía claros límites y contradicciones importantes: los frutos del crecimiento económico desigualmente repartidos generaban una mayor conflictividad, en tanto que los proyectos reformistas agudizaban las tensiones y divisiones dentro del aparato político franquista, sin conseguir apoyos significativos en la sociedad española¹⁹. La represión continuada con que se hacía frente a la conflictividad no sólo no permitía suavizar la imagen del régimen —fundamentalmente de cara al exterior— sino que aumentaba sus rasgos más brutales. En 1975, con la muerte de Franco, el continuismo que habían apoyado la mayor parte de grupos dirigentes era imposible²⁰. Entre los grupos burgueses, sólo pequeños sectores, como por ejemplo el reunido en torno al Círculo de Economía, habían bosquejado un escenario para el futuro diferente al continuista, que no cuestionaba el régimen como opción en el presente, pero que propugnaba para el futuro la integración plena de la economía española en la Comunidad Económica Europea, con todas las implicaciones políticas que ello suponía. Carlos Ferrer Salat, ya en 1969, enfatizaba la dimen-

¹⁸ Evidentemente cuando nos referimos a organizaciones políticas nos estamos refiriendo a grupos de carácter ideológico diverso, que *actúan* —con alto riesgo muchas veces— contra el régimen político dictatorial, no a aquellos grupos de personas que, en su fuero interno, rechazan o consideran inadecuado un determinado sistema político. Parece claro que al poder se le erosiona fundamentalmente a través de la acción política, o como mínimo mediante opiniones manifestadas públicamente, no en conversaciones privadas.

¹⁹ Respecto a las tensiones internas entre grupos y «familias» véase Raymond CARR, Juan Pablo FUSI, *España, de la dictadura a la democracia*. Barcelona, 1979, pp. 228-268.

²⁰ El alcance de la crisis está analizado en Jorge DE ESTEBAN, Luis LÓPEZ GUERRA, *La crisis del Estado franquista*. Barcelona, 1977.

sión política de la integración española en la CEE afirmando que «integrarse a un conjunto de países que tienen una notable estabilidad social y política tranquiliza considerablemente nuestras profundas inquietudes ante nuestro futuro político y social»²¹. Pero esta opción no era mayoritaria al inicio de los setenta, aunque en 1975 se convertiría en la más deseable dada la profunda crisis política y el impacto de la crisis económica internacional. Efectivamente, desde 1973 la coyuntura no podía ser más difícil para los sectores empresariales y tecnocráticos. La muerte de Carrero Blanco había aumentado radicalmente la incertidumbre política al tiempo que se manifestaba la crisis económica y aumentaba la conflictividad social; la oposición antifranquista, aún siendo orgánicamente débil, conectaba con las aspiraciones de buena parte de la sociedad española, y esta oposición, mayoritariamente, no sólo proponía cambios políticos sino también cambios socioeconómicos. Algunos sectores burgueses llegaron a temer por su futuro si, colectivamente, se les pasaba factura por su apoyo directo o indirecto a la dictadura, ante lo cual la idea del pacto social se abrió camino rápidamente; un pacto social que, según se propugnaba en la publicación del Fomento del Trabajo Nacional, en octubre de 1975, sería «una especie de contrato por el cual las clases favorecidas hasta el presente, abdicaran conscientemente de algunos de sus privilegios y cedieran en sus posiciones de ventaja, para ser compartidos por las clases trabajadoras; éstas a su vez considerarían el modelo neocapitalista el campo de juego válido y aceptable, y se mantendrían pacíficamente dentro de él»²².

En definitiva, creemos que la transición política se inició en un contexto muy distinto del descrito por historiadores como Palacio Atard y reproducido con frecuencia en los medios de comunicación, que en realidad son los que conforman opinión en la actualidad. La sociedad española no sólo había cambiado extraordinariamente en las décadas anteriores sino que sectores importantes se movilizaban, de forma más o menos regular y articulada, por unas relaciones sociales y políticas profundamente democráticas.

La acción de los movimientos obreros, vecinales y estudiantiles, de los grupos políticos antifranquistas, que impulsaban esos movimientos y a la vez se nutrían de ellos, las reivindicaciones nacionales en el

²¹ Carlos FERRER SALAT, «Hacia una Cataluña moderna» *Diario de Barcelona*, número extraordinario, febrero 1969. Sobre las actitudes de las organizaciones empresariales catalanas véase Carmen MOLINERO y Pere YSÀS, *Els industrials catalans durant el franquisme*, Barcelona, 1991.

²² *Economía*, número 1855, octubre de 1975.

País Vasco y en Catalunya, no fueron, obviamente, suficientes para provocar el derrumbe de la dictadura, pero la erosionaron decisivamente haciendo inviable el continuismo. Esos movimientos se habían beneficiado del alejamiento del régimen —y, a la vez, lo habían estimulado— de importantes sectores de la Iglesia católica, alejamiento que contribuyó en grado muy notable a la deslegitimación de la dictadura ante importantes sectores de las clases medias y burguesas. Por otra parte, los sectores más dinámicos de la burguesía industrial y financiera eran plenamente conscientes de la necesidad de cambios profundos, no sólo para incorporarse a la Comunidad Europea sino también para evitar una crisis social de imprevisibles consecuencias, mucho más peligrosa con el impacto de la crisis económica mundial.

Una parte importante del personal político franquista fue convenciendo de la imposibilidad de perpetuar el régimen; pero aún así los primeros proyectos reformistas, desaparecido ya Franco, fueron de muy limitado alcance. Las importantes movilizaciones de los primeros meses de 1976 contribuyeron decisivamente a su fracaso²³, y forzaron la elaboración de un proyecto reformista más audaz que paulatinamente se encaminó hacia la liquidación de la dictadura. Este fue el papel decisivo —liquidar la dictadura—, que no se pretende aquí minimizar, de la «segunda generación de reformistas del régimen»²⁴, pero alejado de la afirmación categórica de Martín Villa de que sin los reformistas del franquismo el cambio no hubiera sido posible²⁵. En cuanto al papel de la Corona, independientemente de las convicciones políticas de su titular, era claro también que la reinstauración exitosa de la monarquía en España sólo podía tener lugar si ésta se identificaba con los deseos de la mayoría de los ciudadanos y contribuía, en la medida de sus decisivas posibilidades, a hacerlos realidad.

²³ La importancia de las presiones «desde abajo» en el proceso de transición ha sido subrayada por José M.^a MARAVALL, *La política de la transición*. Madrid, 1984, p. 26-31. Véase también José M.^a MARAVALL y Julián SANTAMARÍA, «Transición política y consolidación de la democracia en España», pp. 199-200, en José Félix TEZANOS, Ramón COTARELO, Andrés DE BLAS (eds.), *La transición democrática española*. Madrid, 1989.

²⁴ Denominación utilizada por Ramón COTARELO, «La transición política» p. 36, en José Félix TEZANOS, Ramón COTARELO, Andrés DE BLAS (eds.), *Op. cit.*

²⁵ Rodolfo MARTÍN VILLA, *Al Servicio del Estado*. Barcelona, 1984, p. 50.